

Núm. de recurso: 2022/REC\_01/000008

Núm. De Resolución: 10/2022

Por medio de la presente, se le notifica que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada ha aprobado la siguiente


**RESOLUCIÓN Nº 10/2022, de 8 de abril**

“VISTO el recurso interpuesto por D. Antonio Conejero Anquita, con DNI 44.259.643-F, en nombre y representación de la mercantil GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.U., NIF B-40221921, contra el acuerdo de la mesa de contratación de la Excm. Diputación Provincial de Granada de fecha 7/6/2021 por el que se declara anormalmente baja la oferta presentada por la empresa GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. en el procedimiento para la adjudicación del “Contrato de servicio de mantenimiento de fontanería, saneamiento y gas en los edificios de la Excelentísima Diputación Provincial de Granada” al no considerar justificada su oferta, de acuerdo con el informe emitido por la Unidad Funcional de Mantenimiento de la Diputación.

Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero:** Con fecha 23/12/2020 se publicó el anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público para la licitación de un contrato de servicio de mantenimiento de fontanería, saneamiento y gas en los edificios de la Diputación Provincial de Granada (número de referencia: SE 13/2020), concurriendo en plazo un total de tres licitadores: ELECNOR, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA GRANADINA, S.A. y GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.

Código Seguro De Verificación	STnYhwZA5XN26JXJsysiyyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08	
Observaciones		Página	1/10	
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>			

**Segundo:** Tras la apertura de los sobres 1 y 2 en sesiones anteriores, la mesa de contratación, el 13/5/2021, procedió a la apertura del sobre 3, resultando las siguientes ofertas económicas (se indica porcentaje de baja ofertada):

ECOGRASA EMPRESA CONSTRUCTORA GRANADINA, S.A.:	5,91%
ELECINOR S.A.:	6,29%
GESTIONA, DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.:	18,25%

El 14/05/2021, mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se comunicó a GESTIONA, DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. que, de acuerdo con los criterios del pliego de cláusulas administrativas, su oferta incurría en presunción de anormalmente baja y se le concedió un plazo de dos días hábiles para que justificara y desglosara razonada y detalladamente la baja realizada conforme a lo establecido en el art. 149 de la LCSP, con justificación expresa sobre los costes laborales que hubiera tenido en cuenta para elaborar su oferta.

Dentro del plazo concedido la empresa presentó la documentación con la que pretendía justificar su oferta.

El 31/05/2021 se aporta al expediente informe del técnico de la Unidad Funcional de Mantenimiento, en el que se manifiesta que no queda justificada la oferta.

**Tercero:** La mesa de contratación, en sesión de 7/6/2021, acordó, a la vista del informe de la Unidad Funcional de Mantenimiento, declarar anormalmente baja la oferta de la empresa GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., al no considerar justificada su oferta.


El acuerdo fue notificado por medio de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09/06/2021.

**Cuarto:** Interpuesto el recurso se ha concedido trámite de audiencia a los contratistas interesados conforme a lo previsto en el artículo 56.3 de la LCSP, ninguno ha presentado alegaciones.

El órgano de contratación ha emitido informe con fecha 2/3/2022.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Código Seguro De Verificación	STnYhwZA5XN26JXJsysiyyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		



**Primero:** En primer lugar, hay que afirmar la competencia de este Tribunal para conocer del recurso por aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y el Reglamento provincial que lo regula (BOP de 31/12/2012), ya que se han impugnado el acuerdo de exclusión de licitador por haber presentado una oferta anormalmente baja en una licitación de un contrato de servicios con valor estimado superior a los cien mil euros (arts. 44.1.a y 2.b de la LCSP).


**Segundo:** Las facultades del Sr. Conejero Anguita para representar a la recurrente GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. se acreditan en virtud de escritura pública de nombramiento y cese de administradores otorgada el 6/9/2012 ante el notario del Ilustre Colegio de Castilla y León don José María Olmos Clavijo con el número novecientos cuarenta y cinco de su protocolo.

**Tercero:** Debe examinarse ahora la fecha de presentación del recurso, el cual fue interpuesto, en primer lugar y de modo erróneo, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el cual lo remitió al órgano equivalente de la Junta de Andalucía, quien a su vez, tras dictar resolución de inadmisión por incompetencia, lo envió al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Granada.

Señala el artículo 116.a) de la LPACAP es causa de inadmisión del recurso ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública, en cuyo caso el recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual dispone que el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.

El recurso fue presentado ante TACRC el 29/06/2021, derivado al de la Junta de Andalucía el 8/2/2022 y, finalmente, tuvo entrada en el Tribunal de la Diputación el 15/2/2022. Es decir, fue presentado dentro del plazo de quince días previsto por el artículo 50 de la LCSP, pero ante un órgano equivocado, llegando al órgano competente fuera del plazo legalmente establecido.

Código Seguro De Verificación	STnYhwZA5XN26JXJsysiyyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		



Dado el principio *pro actione* que guía este tipo de procedimientos, dado que el recurso fue presentado en plazo y, finalmente, establecida la obligación legal por parte de los órganos que se consideren incompetentes de dar traslado al competente, debe entenderse que el recurso ha sido presentado en plazo.

**Cuarto:** Procede ahora entrar en el fondo del asunto.

**1.-** La mesa de contratación, ante una baja del 18,25%, frente a las del 5,91% y 6,29% de las otras licitadoras, solicita a la empresa en presunción de oferta anormalmente baja que “justificara y desglosara razonada y detalladamente la baja realizada conforme a lo establecido en el art. 149 de la LCSP, con justificación expresa sobre los costes laborales que hubiera tenido en cuenta para elaborar su oferta”.


El artículo 149 de la LCSP prevé que la mesa de contratación pueda pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

- a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
- b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
- c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
- d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.
- e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

**2.-** La empresa argumenta la baja del siguiente modo:

2.1.- Mano de obra. Las tablas salariales son las del convenio propio (BOCM 31/1/2015).

2.2.- Apoyos, atención de emergencias. Se prevé el apoyo de personal propia de la empresa en casos de emergencias.

Código Seguro De Verificación	STnYhwZA5XN26JXJsysiyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08	
Observaciones		Página	4/10	
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>			

2.3.- Equipamiento de personal. Todos los equipos de protección, tanto individual como colectivos, están incluidos en los costes previstos.

2.4.- Equipamiento informático y comunicaciones. Tienen un acuerdo con Orange para la reducción del coste de las líneas telefónicas y la mayoría de los gastos en este apartado se encuentran incluidos dentro de los gastos generales.

2.5.- Materiales. Cuenta con acuerdos con proveedores, dado el elevado volumen de su negocio, para adquirir material a precios competitivos.

2.6.- Herramientas y medios auxiliares. Amplios perdidos de amortización por la reubicación de materiales una vez que se presta el servicio, así como acuerdos con proveedores para suministrar productos a precios más bajos.

2.7.- Apoyos. Descripción de labores de mantenimiento que pueden realizar.

2.8.- Otros gastos. Señalan que se contemplan gastos como anuncios o imprevistos no contemplados.

2.9.- Gastos generales. Se incluyen los gastos generales.

Como documentación adicional se aporta una tabla salarial por categorías, un cuadro resumen de los gastos por partidas, una relación de contratos y una serie de facturas de equipamiento informático y comunicaciones.

**3.-** El informe de la Unidad Funcional de Mantenimiento de la Diputación, en que se apoya la mesa de contratación para no estimar la justificaciones de la licitadora, contiene los siguientes razonamientos:


3.1.- Los PPT exigen que el convenio colectivo sectorial de referencia será el Convenio Colectivo Provincial de Industrias Siderúrgicas de Granada. En el convenio propio de la empresa se señala taxativamente: "Se excluirán de la aplicación de este convenio aquel personal adscritos a servicios de licitación pública donde quede establecido en los Pliegos de Prescripciones la obligatoriedad de aplicación de un determinado convenio...."

3.2. Hay defectos de cálculo en las retribuciones del convenio, de conformidad con lo establecido en las propias cláusulas del mismo.

3.3.- El actual convenio de la empresa licitadora entró en vigor el 1 de enero de 2021, cuando la presentación de proposiciones finalizaba el 25 de enero de 2021. Por lo tanto, no resulta aplicable el convenio citado por la recurrente.

3.4.- Considera incorrecto que los costes del ingeniero técnico industrial, exigido por el PPT, se haya incluido dentro de los gastos generales, concepto en el que también

Código Seguro De Verificación	STnYhwZA5XN26JXJsysiyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		



se incluye un 6% por gastos derivados de incapacidades transitorias. Pese a lo cual, reduce la estimación de gastos generales a un 10%, frente al 13% previsto por el PPT.

3.5. El ahorro alegado por compra de repuestos (450 €) y por herramientas y medios auxiliares (5.146,14€) no son relevantes a efectos de justificar la baja.

**4.-** En el recurso se señala lo siguiente:

4.1.- Preferencia del convenio colectivo de empresa frente al sectorial exigido por los pliegos, conforme a la doctrina del TACRC 1464/2019.

4.2. En el nuevo convenio, el de 2021, se ha excluido expresamente la alusión al "personal adscritos a servicios de licitación pública donde quede establecido en los Pliegos de Prescripciones la obligatoriedad de aplicación de un determinado convenio".

4.3. El informe confunde el centro de trabajo con el lugar de trabajo, estando este último en Andalucía, pero no así el centro de trabajo, que radica en la Comunidad de Madrid.

4.4. Considera que el resto de reducciones de gastos están plenamente justificadas, sin que sea obligación de ellos, por no venir exigida en los pliegos, aportar los convenios suscritos con proveedores.

**5.-** El informe del órgano de contratación, suscrito por la Jefa de Sección de Tramitación y Coordinación 3 del Servicio de Contratación de la Diputación señala lo siguiente:

5.1. Relata las vicisitudes seguidas por el recurso, que pasó por el TACRC primero y por le de la Junta de Andalucía posteriormente, antes de recabar en el de la Diputación, lo que ha provocado que el contrato se firmara el 23/11/2021, iniciándose su ejecución al día siguiente, antes, en todo caso, de que tuviera entrada el recurso en el registro general del ente provincial.

5.2.- Afirma que "los pliegos que regían la licitación sí recogían expresamente la obligación de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo Provincial de Industrias Siderometalúrgicas de Granada".

5.3. Pese a lo señalado anteriormente, la empresa justifica haber calculado sus costes laborales conforme al convenio de 2015, no con arreglo al del 2021, que posteriormente utiliza para argumentar la no existencia la cláusula que excluía la aplicación del convenio de empresa cuando los pliegos de la licitación exigieran la aplicación de otro convenio de ámbito más general.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	STnYhwZA5XN26JXJsysiYg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/10
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		



5.4. En cuanto a los motivos de exclusión de carácter técnico, considera que no rebata ninguno de los argumentos contenidos en los apartados cuarto, quinto, sexto y séptimo del informe de la UFM, por lo que se deduce que la recurrente comparte sus conclusiones, esto es, que los razonamientos de la empresa en su escrito de justificación de la oferta, difícilmente acreditan un ahorro, que a su vez justifique (aunque sea en parte) la baja ofertada.

5.5. Considera que la petición de informe de justificación de la oferta realizada por la mesa de contratación sí ha sido lo suficientemente detallada, pues en el requerimiento se cumple con lo estipulado en el apartado 4º del artículo 149 LCSP y además, en el requerimiento se solicita justificación expresa de los costes laborales que haya tenido en cuenta para elaborar su oferta. Por todo ello, quien informa no considera que pueda predicarse opacidad en el documento de requerimiento de la mesa de contratación.

**Quinto.-** Según el PPT más del 88% del presupuesto de ejecución material se corresponde con gastos de personal, por ello el importe sustancial de la baja ofertada por la empresa se centra en ese capítulo, además de una reducción del 13 al 10 por ciento de los gastos generales. El resto de los importes no son relevantes, dada su escasa cuantía, a los efectos de justificación de la baja.

Resulta, por tanto, necesario en principio determinar cuál es el convenio colectivo de aplicación.


El PPT señala que, para el estudio económico de la mano de obra directa empleada en el desarrollo del servicio de mantenimiento, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo Provincial de industrias Siderometalúrgicas de Granada; y en el PCA se señala que el convenio laboral de referencia es este convenio, el cual vuelve a ser citado para explicar el criterio de cálculo del valor estimado del contrato.

Pero una cosa es que use un determinado convenio colectivo sectorial para calcular los costes de un contrato y otra muy distinta que los pliegos impongan la aplicación de este convenio, pues ello sería contrario al sistema de fuentes del Derecho laboral, que establece su propio orden de prelación en la aplicación de los convenios colectivos.

Este es el sentido de la resolución del TACRC 1464/2019, cuyo criterio asume este tribunal:

*En consecuencia, si bien resulta adecuado que, para calcular el precio, el órgano de contratación considere como costes salariales los establecidos en el convenio colectivo*

Código Seguro De Verificación	STnYhwZA5XN26JXJsysiyyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		



sectorial que resulte de aplicación, por ser el referente ordinario en el sector (y así se recoge en el artículo 101 de la LCSP), la obligación que se impone al adjudicatario del contrato ha de ser la de cumplir con las obligaciones salariales que deriven del convenio colectivo que resulte de aplicación.

No obstante, el artículo 122.2 de la LCSP (EDL 2017/226876) dispone:

"2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán (...) la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; (...)."

Ahora bien, una interpretación literal de este precepto conduciría a que, en el caso de que el adjudicatario del contrato se rigiera por un convenio distinto del convenio sectorial, la celebración de un contrato del sector público supondría una alteración de las condiciones salariales de los trabajadores, dando lugar a una inaplicación parcial (sólo respecto de los trabajadores afectos a la ejecución del contrato) y temporal (sólo durante la ejecución del contrato) del convenio colectivo que resulta de aplicación. Ésta es una situación que no resulta compatible con nuestro derecho laboral y que castiga injustificadamente a entidades del sector público (ya que deben soportar unos costes salariales de sus contratistas superiores a los que soportará cualquier otro contratante).

De una forma más adecuada con la realidad, el artículo 35 de la LCSP, relativo al contenido mínimo del contrato, establece que en los documentos de formalización de los contratos figurará:


"n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación."

La interpretación conjunta de estos preceptos conduce a que la obligación que haya de figurar en los pliegos sea la de respetar las obligaciones salariales que resulten del convenio colectivo que se encuentre en vigor. Normalmente será el convenio colectivo sectorial, pero en los casos en que resulte de aplicación un convenio colectivo distinto, habrá que estar a las obligaciones salariales establecidas en éste.

**Sexto.** Dicho esto, debe analizarse qué convenio colectivo de la empresa es el que debió utilizarse para calcular la oferta realizada.

El convenio actualmente en vigor es el publicado en el BOCM de 21/4/21: **RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito y publicación**

Código Seguro De Verificación	STnYhwZA5XN26JXJsysiyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		





*del Convenio Colectivo de la empresa Gestiona Desarrollo de Servicios Integrales (código número 28100902012014).*

Su vigencia es desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, y su ámbito territorial el de los centros de trabajo de la Comunidad de Madrid.

El convenio fue suscrito por la comisión negociadora el 20 de noviembre de 2020, por lo tanto, cuando se publica en la Plataforma de Contratos del Sector Público la licitación, el 23/12/2020, el convenio ya estaba suscrito por las partes, y acordada su vigencia a partir del 1 de enero de 2021, por lo que la empresa conocía con exactitud el coste laboral de la ejecución del contrato si resultaba adjudicataria, que no era otro que el derivado del convenio suscrito para el periodo 2021-2025.

Por ello no hay razón para que la empresa no presentara su oferta conforme a este convenio, si consideraba que era el que resultaba de aplicación a los trabajadores que prestaran el servicio a la Diputación de Granada, en caso de resultar su empresa adjudicataria.

Sin embargo, la empresa, con objeto de justificar unos costes inferiores a los que, con plena certeza, sabía que iba a tener, no solo presenta su oferta, sino que incluso justifica su baja aportando las tablas salariales del convenio de 2015 (BOCM 31/1/2015).

Es más, cuando la licitadora presenta su pretendida justificación de la oferta, el 16/5/21, ya estaba publicado en el BOCM el nuevo convenio colectivo, y pese a ello, insiste en mantener los costes de un convenio, el de 2015, que llevaba ya más de cinco meses sin aplicarse.

Pero no solo eso, sino que cuando a la empresa no le interesa que se le aplique una cláusula del convenio de 2015, aquella que establecía "Se excluirán de la aplicación de este convenio aquel personal adscritos a servicios de licitación pública donde quede establecido en los Pliegos de Prescripciones la obligatoriedad de aplicación de un determinado convenio....", entonces alega que el convenio de 2021 ya no la contiene.

Es decir, la recurrente defiende en el mismo recurso que es de aplicación el convenio de 2015 (cuando pretende justificar las retribuciones) o el del 2021, cuando pretende no aplicar determinada cláusula.

En estas circunstancias, no puede considerarse que la empresa haya justificado que las retribuciones incluidas en la oferta (deducidas del convenio de 2015) permitan cumplir con lo establecido en el convenio en vigor (de 2021).

Dado el sentido de la resolución, no resulta necesario entrar en el resto de consideraciones del recurso.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	STnYhwZA5XN26JXJsysiig==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/10
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		



**ESTE TRIBUNAL**, en sesión celebrada en el día de la fecha,

**ACUERDA**

**PRIMERO:** DESESTIMAR el recurso interpuesto don Antonio Conejero Anquita, con DNI 44.259.643-F, en nombre y representación de la mercantil GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.U., NIF B-40221921, contra el acuerdo de la mesa de contratación de la Excm. Diputación Provincial de Granada de fecha 7/6/2021 por el que se declara anormalmente baja la oferta presentada por la empresa GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. en el procedimiento para la adjudicación del "Contrato de servicio de mantenimiento de fontanería, saneamiento y gas en los edificios de la Excelentísima Diputación Provincial de Granada" al no considerar justificada su oferta, de acuerdo con el informe emitido por la Unidad Funcional de Mantenimiento de la Diputación.

**SEGUNDO:** Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

**TERCERO:** Notificar la presente Resolución a todos los interesados en el procedimiento. Esta resolución es directamente ejecutiva y contra la misma sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de esta resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 10.1 k) y l) y 11.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa."

EL SECRETARIO SUPLENTE

Fdo. Pablo Córdoba Belvel

Código Seguro De Verificación	STnYhwZA5XN26JXJsysiYg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Cordoba Belbel	Firmado	11/04/2022 12:12:08
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		

